

MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS, LA ELECCION DEL PROCEDIMIENTO, LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y OTROS ASPECTOS REFERIDOS AL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: “75 PLAZAS PARA EL APOYO RESIDENCIAL AL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PACIENTES CON TRASTORNO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS (3 LOTES)”.

INSUFICIENCIA DE MEDIOS

El contrato tiene como finalidad dar continuidad al de referencia C.A. 9/2018 denominado: “75 PLAZAS PARA EL APOYO RESIDENCIAL AL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE ADICTOS A DROGAS (3 LOTES)”, que finaliza el próximo 31 de diciembre de 2024 sin posibilidad de prórroga (Nexus A/SER-016998/2020).

El objeto del contrato es la prestación del servicio consistente en la gestión de 75 plazas residenciales, en tres lotes, para la atención a pacientes con trastorno por consumo de sustancias, en tratamiento ambulatorio, larga historia de consumo y múltiples recaídas, que presentan un importante grado de disfuncionalidad, discapacidad y deterioro de salud tales, que suponen incapacidad o pérdida significativa de autonomía, o que se encuentren en situación de alta marginalidad y exclusión o que, al mismo tiempo, sufren otras enfermedades mentales y que necesitan apoyo residencial para cumplir las prescripciones del tratamiento.

La atención residencial tiene como finalidad ofrecer atención sociosanitaria a personas con trastorno por consumo de sustancias para conseguir adherencia al tratamiento, mantener abstinencia y favorecer el mantenimiento de la remisión sostenida en el consumo de drogas. La interrupción de la prestación de este recurso residencial tendría consecuencias muy negativas en el tratamiento asistencial de los pacientes, por lo que es necesario garantizar su continuidad con el inicio de la ejecución del contrato el día 1 de enero de 2005 ya que el contrato vigente finaliza el 31 de diciembre de 2024.

La amplitud y las especiales características del objeto del contrato, reflejado todo ello en el pliego de prescripciones técnicas, impide que la prestación de estos servicios pueda ser ejecutada con personal propio. Por otro lado, tampoco se dispone de material y equipamiento suficiente para dar cobertura a los trabajos cuya contratación se pretende. En consecuencia, cabe concluir que el Servicio Madrileño de Salud no puede prestar con medios propios este servicio y debe recurrir a su contratación pública, conforme con las exigencias establecidos en los artículos 28.1 y 116.4 f) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

ELECCION DEL PROCEDIMIENTO

Con objeto de garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y una eficiente utilización de los fondos públicos, la licitación y adjudicación del contrato se realizará a través de un procedimiento abierto con pluralidad de criterios, que es el que la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 131.2, establece como procedimiento ordinario.

Por un lado, el procedimiento abierto es el que proporciona mayores niveles de publicidad y transparencia, que garantizan la no discriminación e igualdad de trato, y por otro, la utilización de una pluralidad de criterios permite adjudicar el contrato a la oferta que, cumpliendo con los requisitos técnicos mínimos exigidos en los pliegos, presente la mejor relación calidad-precio, lo que facilita seleccionar la oferta más ventajosa y, en consecuencia, garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos.

JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el art 202 es obligatorio establecer al menos una de las condiciones especiales de ejecución referidas a consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, de tipo social o relativas al empleo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado Séptimo del Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, los órganos de contratación deberán incluir, al menos, una condición especial de tipo social, medioambiental o relacionada con la innovación, siempre que esté vinculada al objeto del contrato, no sea discriminatoria y sea proporcionada y compatible con el derecho comunitario.

En cumplimiento de esta normativa, y en la medida en que el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales puedan verse afectados por la ejecución del contrato, los licitadores deberán presentar una declaración responsable donde determinen claramente la línea de actuación dirigida a la implementación de estrategias de gestión medioambiental, tal y como queda detallado en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde indiquen detalladamente los planes dirigidos a la promoción del reciclado de productos, vinculados con la prestación del servicio que se oferta.

Además, como la ejecución del contrato implica el tratamiento de datos personales especialmente sensibles por parte del contratista, será necesario el establecimiento de una condición especial de ejecución que haga referencia a la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

El cumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución del contrato tendrá el carácter de obligación esencial, siendo el incumplimiento de cualquiera de ellas

causa de resolución del contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 211.1.f) de la LCSP

JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA O PROFESIONAL

La solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional al objeto del contrato, no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas o de las entidades sin ánimo de lucro que suelen participar en las licitaciones a este tipo de contratos. Por tal motivo, pero teniendo en consideración que con dicha solvencia se debe acreditar la capacidad de la entidad adjudicataria para hacer frente a las prestaciones objeto del contrato, se ha establecido como solvencia económica y financiera suficiente que el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior al importe correspondiente a una vez el valor medio anual del presupuesto base de licitación del contrato.

La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. En el caso que nos ocupa, la solvencia técnica se asocia al presupuesto de ejecución del contrato y se vincula con el objeto del contrato, estableciéndose en el PCAP que se entenderá acreditada, de acuerdo con la actividad a desarrollar objeto del contrato, mediante la experiencia en la gestión de centros y/o servicios de tratamiento, apoyo al tratamiento o reducción de daños, prestados en centros con autorización administrativa adecuada a la prestación, por un importe igual o superior al 50 % de la anualidad media del presupuesto del contrato, IVA excluido, de cada uno de los lotes a los que se licite

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y SU PONDERACIÓN

Criterio relacionado con los costes: El criterio que se valorará en este apartado será la oferta económica que realicen las entidades licitadoras.

Ponderación: 49 puntos.

Criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

Ponderación: 51 puntos.

Nº	Descripción del criterio	Valoración
1	Recursos Humanos: <ul style="list-style-type: none"> - Aportar mayor número de auxiliares de enfermería de los requeridos en el PPT. Por cada profesional a tiempo completo: 2 puntos, o su proporcionalidad a tiempo parcial. Máximo 4 puntos. - Por especialización de algunos de los profesionales exigidos en el PPT. Por cada puesto de auxiliar de enfermería cubierto a tiempo completo por la categoría profesional de educación o trabajo social: 2,5 puntos, o su proporcionalidad a tiempo parcial. Máximo 5 puntos - Aportar profesionales no requeridos en el PPT y que suponen una mejora en la prestación: Por cada profesional de la categoría de psicología, trabajo social o educación social: por cada profesional a tiempo completo: 5 puntos, o su proporcionalidad a tiempo parcial. Máximo 10 puntos 	Máximo 19 puntos
2	Docencia, formación e Investigación: <ul style="list-style-type: none"> - Oferta de rotación anual en prácticas para profesionales de enfermería y auxiliares de enfermería: 1 punto por cada alumno/a, hasta un máximo 5 puntos. - Plan de formación continuada del personal de al menos 60 horas anuales: 7 puntos 	Máximo 12 puntos
3	Actividades de ocio y tiempo libre para los residentes: <ul style="list-style-type: none"> - Actividades turísticas y culturales para los residentes. Deben ser gratuitas e incluir el transporte y alojamiento con pernocta de al menos una semana al año de duración”: 5 puntos. 	5 puntos
4	Humanización: <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Voluntariado implantado en los últimos 2 años (*): 5 puntos. 	5 puntos
5	Instalaciones del apoyo residencial. <ul style="list-style-type: none"> - Aportar mayor número de habitaciones individuales de las exigidas en el pliego de prescripciones técnicas: 0,5 puntos por cada habitación adicional. Máximo 5 puntos. - Aportar mayor número de plazas adaptadas y accesibles a personas con movilidad reducida de las requeridas en el pliego de prescripciones técnicas: 0,5 puntos por cada habitación adicional. Máximo 5 puntos 	10 Puntos

(*) PLAN DE VOLUNTARIADO:

Incluirá un equipo de voluntarios, en horarios de mañana /tarde y con una presencia de cada uno de los voluntarios de 10 horas semanales. Con compromiso escrito según la Ley 45/2015, de 14 de octubre de voluntariado en España. Realizarán tareas de apoyo a los profesionales del centro en los procesos terapéuticos, talleres, actividades lúdicas, de ocio y tiempo libre.

Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: NO

JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

Se considera que los criterios que sirven de base para la adjudicación del contrato cumplen los siguientes requisitos:

- a) Están vinculados al objeto del contrato.
- b) Han sido formulados de manera objetiva, con pleno respecto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad y no confieren al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.
- c) Garantizan que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, al acompañarse de especificaciones que permiten comprobar de manera fehaciente la información facilitada por los licitadores y así evaluar en qué medida las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

La ponderación escogida (49 % oferta económica, 51 % criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas) es conforme a lo establecido en el artículo 146 de la Ley 9/2017, en concreto: “cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las formulas establecidas en los pliegos”.

Se considera que los criterios cualitativos que sirven de base para la adjudicación del contrato garantizan que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva al acompañarse de declaraciones responsables de las entidades licitadoras que permiten comprobar de manera fehaciente la información facilitada y así evaluar en qué medida las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

Entre los criterios cualitativos se han incluido criterios de adjudicación relativos a los recursos humanos que la entidad adjudicataria se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, tanto en el número de profesionales destinados, como en su grado de especialización técnica, docencia, formación e investigación, criterios todos ellos vinculados al objeto del contrato y que incide en la calidad del servicio prestado.

El punto 4 del PPT establece la plantilla mínima con que se debe contar para prestar el servicio en las condiciones establecidas. Sin embargo, un incremento del número de profesionales destinados en el centro permitiría un reparto de la carga de trabajo que incidiría directamente en la calidad del servicio prestado, con

más tiempo disponible para el ejercicio la labor asistencial por parte de estos profesionales.

Con objeto de no limitar la libre concurrencia e igualdad en la adjudicación del contrato, a la plantilla de los profesionales se les exige la titulación necesaria mínima para la ejecución del contrato, pero se debe valorar positivamente que se disponga en el centro de personal con titulación en psicología, trabajo social o educación social; una mayor especialización y formación del personal incide directamente en la calidad de la prestación del servicio.

En este mismo sentido se han incluidos criterios de adjudicación relativos a la docencia, formación del personal adscrito a la ejecución del contrato. Aspectos como la docencia en las rotaciones del personal en prácticas o la participación en cursos de un plan de formación continuada, inciden en el desarrollo de las carreras de los profesionales implicados, lo que finalmente repercutirá en la calidad asistencial prestada a los pacientes.

Por otro lado, la oferta de un mayor número de habitaciones individuales, o de plazas adaptadas y accesibles a personas con movilidad reducida facilita la convivencia entre los residentes y repercute en la calidad y adherencia al tratamiento.

Tanto para el criterio relacionado con el precio como con los relacionados con la calidad del contrato, se ha aplicado una fórmula que permite un reparto proporcional de puntos en función de las ofertas presentadas.

JUSTIFICACIÓN DE EXIGENCIA DE UNA GARANTÍA COMPLEMENTARIA

El art. 107 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que, en casos especiales, el órgano de contratación puede exigir en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, además de la garantía definitiva, el licitador que vaya a ser propuesto como adjudicatario preste una garantía complementaria de hasta un 5 por ciento del precio que haya ofertado, IVA excluido. En este mismo artículo la ley considera que, a estos efectos, constituye un caso especial aquel en el que la oferta presentada por el adjudicatario resultara inicialmente incurso en presunción de anormalidad.

El apoyo residencial al tratamiento ambulatorio de adictos a drogas con trastorno persistente en situación de alta marginalidad, graves afectaciones orgánicas y con otras patologías mentales es una herramienta importante para el seguimiento y la evolución de los pacientes, y su interrupción podría tener consecuencias negativas en el tratamiento dadas las características de estos pacientes. En este sentido se deben tomar todas las medidas que puedan garantizar su continuidad y buena ejecución, y entre ellas, el art. 107 de la LCSP nos permite establecer en el pliego de prescripciones administrativas particulares del expediente de contratación que el licitador que vaya a ser propuesto como adjudicatario preste una garantía complementaria del 5 por ciento del precio de su oferta, IVA excluido, si su oferta

resulta inicialmente incurso en presunción de anormalidad, lo que se considera indicado en este caso.

JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Durante la ejecución del contrato, no garantizar de forma expresa la reparación de los daños que puedan sufrir las personas o las cosas, de modo muy especial las que constituyan el objeto mismo de la prestación, puede tener consecuencias negativas en la continuidad y seguridad de la asistencia a los pacientes, y por este motivo se entiende que está suficientemente justificada la necesidad de que el adjudicatario del contrato cuente con un seguro para cubrir la responsabilidad civil sobre los daños causados durante la prestación del servicio en las personas o en los bienes muebles e inmuebles objeto de la actividad contratada.

JUSTIFICACIÓN DEL REGIMEN DE INFRACCIONES Y PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA DEL CONTRATO

En el PCAP se recogen expresamente las penalidades por ejecución defectuosa del contrato de acuerdo con el régimen de infracciones y penalidades que se describe.

Las infracciones que se establecen están relacionadas con incumplimientos de las obligaciones establecidas expresamente en los pliegos del contrato, tanto de obligaciones referidas a las condiciones en que los servicios deben ser prestados para la ejecución del contrato, como de los requisitos de capacitación exigidos al personal que debe realizarlo. A título de ejemplo pueden mencionarse la manifiesta incapacidad o negligencia profesional, no acatar las instrucciones dictadas por la dirección del centro, el trato desconsiderado a pacientes o familiares, etc.

Existe una relación evidente entre la buena ejecución del servicio y el adecuado tratamiento de los pacientes, que es el fin último perseguido por el contrato, por lo que un incumplimiento de las obligaciones contractuales que redunde en la calidad de las prestaciones del servicio debe ser objeto del régimen de penalidades propuesto, cuya cuantía se ha establecido de manera proporcional en relación con la gravedad de la infracción.

LA DIRECTORA GENERAL ASISTENCIAL DEL SERMAS

Firmado digitalmente por: QUINTANA MORGADO ALMUDENA
Fecha: 2024.08.13 08:51

Fdo.: Almudena Quintana Morgado